

Trump ataca a Harvard

Felipe Edwards del Río



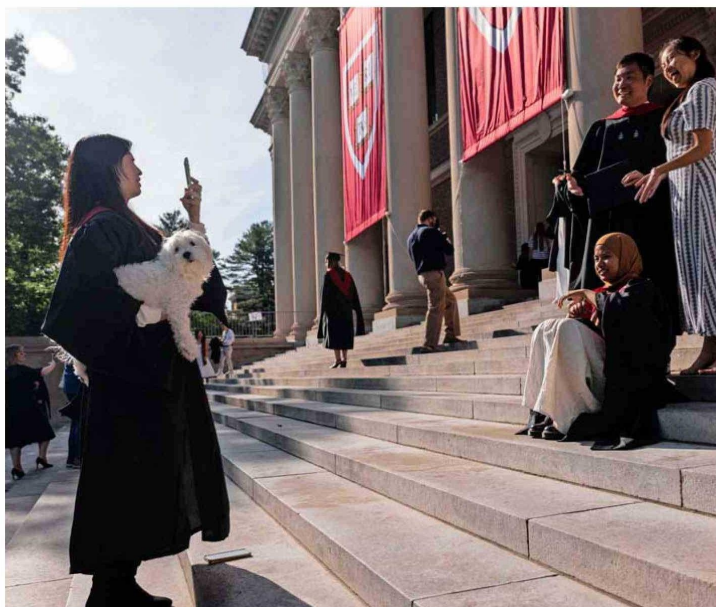
Uno de los pilares de las campañas políticas del Presidente Donald Trump ha sido su guerra contra las doctrinas liberales y lo que conservadores estadounidenses llaman la ideología “woke”, un término empleado por afroamericanos, desde los años 1930, para referirse a un estado de alerta contra el racismo, discriminación e inequidad.

Trump y sus ideólogos, como Stephen Miller, han enfocado este choque cultural en las universidades más prestigias del país, ocho de ellas reunidas en la llamada Ivy League. Entre estas se destaca Harvard, la más antigua y de mayores recursos económicos, con fondos (*endowment*) de 53 mil millones de dólares, de los cuales la gran mayoría está restringida en su uso para proyectos específicos.

La cruzada se intensificó el 1 de febrero, con el anuncio de un Grupo de Trabajo para Combatir el Antisemitismo, un equipo multisectorial bajo la dirección del Ministerio de Justicia. No se explicó, eso sí, cómo se mediría la existencia de antisemitismo. Su investigación ahora contempla al menos sesenta universidades. En marzo, el gobierno declaró que se encontraba examinando contratos federales con Harvard por 256 millones dólares, así como ocho mil setecientos millones de dólares en subsidios ya comprometidos.

La reacción inicial de Alan Garber, el nuevo presidente de Harvard, fue de no antagonizar con el gobierno. Contrató como abogados a William Burck, asesor de ética para las empresas de Trump, y Robert Hur, el fiscal que investigó al expresidente Joe Biden por su manejo de documentos clasificados, ambos expertos en el funcionamiento de la maquinaria jurídica de Trump. Durante dos semanas negociaron con la administración sobre las medidas para combatir el antisemitismo y mejorar la seguridad de los estudiantes. Las demandas del gobierno no estaban claras, pero prometió enviar una carta para explicarlas.

El documento que enviaron contenía exigencias sin precedentes: entregar toda información relacionada con la contratación de sus profesores, sujeta a una revisión por el gobierno federal; entregar toda información relacionada a la admisión y rechazo de alumnos postulantes, también sujeto al juicio del gobierno. y contratar a un cuerpo externo que audite los estu-



diantes, profesorado y administradores para asegurar “diversidad de puntos de vista” de cada facultad. También la inmediata clausura de todo programa destinado a promover la diversidad, equidad e inclusión; reformar facultades y programas con flagrantemente (*egregious*) récords de antisemitismo, entre ellos la facultades de Divinidad, Educación, Medicina, Gobierno y el Centro de Estudios del Medio Oriente. La misiva aparentemente fue enviada sin la debida autorización, pero el gobierno respaldó sus exigencias.

Como observó Steven Pinker, psicólogo y presidente del Consejo de Libertad Académica de la universidad, que un gobierno imponga diversidad es un concepto orwelliano, contradictorio y lleva a situaciones absurdas: “¿Este gobierno obligará a la Facultad de Economía a contratar marxistas, a Psicología contratar junguianos y a Medicina contratar a homeópatas?”.

El lunes siguiente, los abogados de Harvard respondieron no obedecerían estas exigencias, las que consideraron inconstitucionales. Garber declaró que “Ningún gobierno —de cualquier partido— debe dictar lo que una universidad privada puede enseñar, quiénes pueden admitir y contratar, y cuáles temas pueden investigar”.

La administración de Trump res-

“Las embestidas de Trump atentan contra uno de los roles principales de una universidad”.

pondió congelando dos mil millones de dólares en subsidios para múltiples investigaciones, y el 22 de mayo suspendió el derecho de Harvard a matricular a estudiantes extranjeros, que representan el 27 por ciento de sus 6.800 alumnos. La universidad se ha querellado contra el gobierno por ambas medidas.

Alan Garber ha demostrado gran coraje al admitir que existe un problema de antisemitismo en Harvard, y que ha tomado medidas para erradicarlo. Las universidades estadounidenses también han perdido el apoyo del público estadounidense, que no las valora como antes, en parte, por su elevado costo. Según una encuesta de Gallup, el año pasado un tercio la población expresó poca o nada confianza en la educación superior, comparado con el diez por ciento hace una década.

Pero las embestidas de Trump van mucho más allá del antisemitismo. Atentan contra uno de los roles principales de una universidad: expandir el conocimiento a través de investigaciones científicas, controlar quienes pueden asistir y enseñar en sus aulas y dictaminar los temas que pueden estudiar. Su propósito es de cambiar radicalmente el financiamiento y composición de instituciones fundamentales para el desarrollo del capital humano y económico del país. La lucha de Harvard es una batalla por el alma de todas las universidades del país.